

Sección latinoamericana

GUYANA

Un vistazo a su evolución reciente

*Con la reforma constitucional
se inicia una nueva etapa*

El 10 de abril último el Parlamento de la República Cooperativa de Guyana aprobó la iniciativa del primer ministro, Linden Forbes Sampson Burnham, de reformar la Constitución. Las principales características de la reforma propuesta son: a] transformar la Presidencia de la

República, que cumplía una función decorativa, en un órgano de gobierno real, con poder de veto sobre las resoluciones del Parlamento; b] reorganizar la administración pública, y c] definir la etapa actual como una de transición del capitalismo al socialismo.

De acuerdo con el actual texto constitucional, su reforma requiere una mayoría parlamentaria de dos tercios y la aprobación en un referéndum por mayoría simple. Como el partido gobernante, Congreso Nacional del Pueblo (CNP), tiene 37 de los 53 escaños, la primera fase del proceso de reforma culminó con la aprobación en el Parlamento. La segunda se inició al convocarse el referéndum para el 10 de julio.

Al plantear su iniciativa de reforma, el Primer Ministro sostuvo que Guyana requiere de un cambio constitucional que adecue el texto básico a la orienta-

ción socialista del país. La oposición, representada por el Partido Progresista del Pueblo (PPP), con 14 diputados, manifestó que la reforma tiende a concentrar el poder en las manos del Presidente y calificó la consulta popular planteada como "el fin de los referendos", aconsejando a sus partidarios la abstención.

Los resultados de la consulta favorecieron ampliamente al Gobierno, puesto que 311 587 ciudadanos aprobaron su proposición y 7 699 votaron en contra. Se estima que la abstención fue de alrededor de 36 por ciento.¹

Así, el actual Parlamento se transformará en Asamblea Constituyente; se supone que tardará entre 12 y 18 meses en elaborar el nuevo texto, por lo cual

1. Véase *El Día*, México, 13 de julio de 1978.

Las informaciones que se reproducen en esta sección son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publicaciones nacionales y extranjeras y no proceden originalmente del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., sino en los casos en que así se manifieste.

se pospondrán las elecciones generales que debían realizarse el 25 de octubre de este año.

La iniciativa de reforma constitucional marca el inicio de una fase distinta en la vida de la joven república guayanesa. El anterior período se caracterizaba por un régimen bipartidista que suponía la alternancia de los grupos mayoritarios en el poder. Aparentemente las instituciones políticas formales no correspondían a la realidad del país, ya que fueron copiadas de Inglaterra, en donde surgieron como producto de circunstancias muy distintas de las vigentes en Guyana.

El bipartidismo guyanés, lejos de promover la integración nacional, permitió la acentuación de las diferencias entre las dos grandes comunidades, de origen hindú y africano, que dan vida a los dos partidos de base étnica. En esas condiciones, el sistema contribuyó a la disgregación nacional, al enfrentamiento racial y a la aparición de vicios políticos como el "sufragio a la guayanesa" (la adulteración de los resultados electorales).

Algunos antecedentes de la evolución política

A partir de 1928 el Gobierno británico concedió a su colonia de Guayana una autonomía limitada, modalidad política que se amplió en 1953 al establecerse un régimen formado por un gobernador inglés y un poder legislativo bicameral de 24 miembros electos y 10 nombrados por el Gobernador.

Esas primeras elecciones fueron ganadas por las fuerzas anticolonialistas, organizadas por el PPP, que obtuvo 75% de los escaños, y que logró el apoyo de las dos comunidades étnicas principales, en especial el de los trabajadores de origen hindú agrupados en los sindicatos azucareros. Como resultado de esas elecciones el dirigente del PPP, Cheddi Jagan, fue nombrado Primer Ministro, cargo en el que permaneció menos de seis meses, ya que el 9 de octubre de 1953 el Gobernador suspendió la Constitución argumentando que el PPP intentaba instaurar una dictadura comunista.

En el PPP surgió una fracción encabezada por el segundo hombre del partido, Forbes Burnham, de origen africano,

que contaba con el apoyo de su comunidad étnica, en especial el de los trabajadores de la industria de transformación y de los servicios.

Las elecciones de 1957 ratificaron la victoria del PPP. Jagan fue nuevamente designado primer ministro y Burnham fundó un nuevo partido, el Congreso Nacional del Pueblo (CNP).

La conferencia constitucional celebrada en Londres en 1961 aprobó un nuevo estatuto de autonomía. El 21 de agosto de ese año se volvieron a celebrar elecciones: el PPP obtuvo 42% de los votos y el sistema de votación de mayoría simple en distritos uninominales le permitió ganar 57% de las 35 diputaciones.

Al año siguiente el Primer Ministro propuso al Parlamento una ley que imponía mayores impuestos a los beneficios de las empresas, así como medidas para evitar la evasión fiscal de empresas con matrices extranjeras. Inmediatamente los grupos capitalistas, apoyados por sectores medios, dirigidos por una pequeña organización, Fuerza Unida (FU), emprendieron un movimiento al que se unió el CNP, en el que abundaron los actos de violencia contra la política del Primer Ministro.

En mayo de 1962, Forbes Burnham se entrevistó en Washington con el consejero del presidente Kennedy, Arthur Schlesinger. De ese encuentro Schlesinger ha dado testimonio en su libro *Los mil días de Kennedy*: "Le informé al Presidente la impresión que me dejó la visita de Burnham: que una Guayana británica independiente con Burnham a la cabeza (si se compromete a practicar una política multirracial) nos causará menos problemas que una Guayana británica con Jagan. . . La solución evidente sería instaurar un sistema de representación proporcional".² Por su parte Jagan, recordando esos hechos, escribió que Estados Unidos, empeñado en cambiar el sistema electoral de Guayana, presionó al Gobierno británico para que no concediera la independencia mientras el PPP permaneciera en el poder.³

2. Citado por Bernard Cassen, "La Guyana est bien partie", en *Le Monde Diplomatique*, núm. 224, París, julio de 1974, pp. 34-36.

3. Véase Cheddi Jagan, "De Guyana a Chile", en *Revista Internacional*, núm. 6, Praga, junio de 1974, pp. 68-69.

En octubre de 1963 se desataron graves disturbios organizados por los egresados del Instituto Norteamericano de Desarrollo Libre del Trabajo, organismo financiado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y los sindicatos estadounidenses.⁴ En mayo de 1964 nuevos choques sangrientos crearon una grave crisis. Las fuerzas del orden, bajo el mando del Gobernador, no hicieron nada para impedir la violencia. En esas condiciones el Gobierno británico acordó cambiar unilateralmente la Constitución y el sistema electoral: se abolió la elección de los parlamentarios por mayoría simple en distritos uninominales y se estableció el sistema de representación proporcional, así como una sola cámara con 53 escaños.⁵

En diciembre de ese año se celebraron nuevas elecciones. El PPP obtuvo 45% de los votos y 22 escaños, en tanto que el CNP recogió 40% de los votos y 22 bancas; por su parte, la FU consiguió 12% de los sufragios y 7 curules. El restante 3% se repartió entre dos candidatos independientes. El Gobernador encargó a Forbes Burnham la constitución de un nuevo Gobierno de coalición entre el CNP y la FU. Años más tarde, Cheddi Jagan, al comentar su salida del Gobierno, recordó: "Teniendo en cuenta los precios vigentes, escribió el *Sunday Times*, el complot no costó caro: en el transcurso de cinco años la CIA gastó algo más de 250 000 libras esterlinas. Pero a la colonia británica le costó 170 vidas y numerosos heridos. Las pérdidas sufridas por la economía se elevaron a unos diez millones de libras."⁶

En diciembre de 1965 se celebró en Londres otra conferencia constitucional entre los representantes del CNP y la FU y el Gobierno inglés; el PPP no asistió. Las partes aprobaron una nueva Constitución y —después de 390 años de colonialismo— se proclamó la independencia nacional el 26 de mayo de 1966.

En diciembre de 1968 se celebraron nuevas elecciones, en las que el CNP obtuvo poco más de 50% de los votos. Sin embargo, la oposición las denunció como fraudulentas argumentando que se habían alterado los resultados y falsifi-

4. *Ibid.*

5. *Ibid.*

6. *Ibid.*

cado decenas de miles de votos de guyaneses residentes en el exterior.

El período independiente

Al comenzar la independencia el panorama político de Guyana estaba cargado de posibilidades de una guerra civil entre las dos comunidades nacionales. En el campo económico, cuatro siglos de colonialismo habían creado una estructura dependiente y subdesarrollada basada sobre todo en la explotación del azúcar, la bauxita, el arroz y las maderas.

De acuerdo con las cifras de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en 1965 las actividades agropecuarias y la minería aportaban 41.3% del producto interno bruto (PIB) y ocupaban a 37.7% de la población económicamente activa (PEA), en tanto que el sector industrial, especialmente los ingenios azucareros y la rama alimentaria, generaba 13% del PIB y daba empleo a 15% de la PEA.⁷ El valor de las exportaciones de productos primarios llegaba a 98.5 millones de dólares estadounidenses, mientras que el producto interno ascendía a 182.7 millones de dólares; las primeras representaban, por tanto, 53.9% del PIB. En ese año la población se estimaba en 648 000 personas y el producto per cápita en casi 282 dólares anuales.

En 1965, 84.5% de la población habitaba en zonas rurales; quienes no trabajaban para los consorcios británicos explotaban intensivamente las pequeñas propiedades de la comunidad de origen hindú, cada una de las cuales debía mantener, por lo general, a una numerosa familia.

Merced a la producción azucarera y la minería, cuatro empresas transnacionales dominaban la economía nacional: en la primera las empresas británicas Booker y Jessel poseían 82% de las tierras dedicadas a ese cultivo; el grupo Booker, con sus empresas azucareras, industriales, comerciales, etc., representaba 40% de las exportaciones y 25% del PIB. La minería estaba controlada por la Aluminium Co. of Canada (Alcan), de capital canadiense y estadounidense, y por la Reynolds Metal Co., de capital estadounidense.

7. Véase "Guyana" en *Estudio Económico de América Latina 1971*, CEPAL-ONU, Nueva York, 1972, pp. 152-156.

La infraestructura económica era extraordinariamente reducida; el ferrocarril sólo funcionaba en algunos ingenios y la red de carreteras se reducía a escasos 372 km pavimentados y 719 km de caminos de grava.

En Guyana había un maestro por cada mil habitantes y un médico por cada cinco mil. La dieta media de la población (datos de 1970) era deficiente: 2 399 calorías y 58.8 gramos de proteínas.⁸

El gran atraso económico contrastaba con el apreciable nivel de la organización política; las comunidades étnicas eran la base de los dos grandes partidos: el CNP reunía a los obreros de la minería, a los de las pocas industrias de transformación (excluida la azucarera) y a los empleados de los servicios públicos. El PPP agrupaba a los obreros azucareros, los agricultores del arroz, los trabajadores del comercio, etcétera.

La ausencia de una burguesía fuerte permitió la coincidencia de objetivos entre los dos partidos respecto a la necesidad de impulsar el proceso de desarrollo; sin embargo, los conflictos entre ambos grupos obstaculizaban la búsqueda conjunta de esos objetivos. El Gobierno estaba formado por integrantes de la pequeña burguesía, en la que desempeñaban un papel destacado los jóvenes profesionales egresados de las universidades inglesas, que habían recibido la influencia de numerosos representantes de otros países subdesarrollados, en los que los movimientos políticos tenían mayor desarrollo ideológico.

Según Jagan, la necesidad objetiva de promover cambios coincidía con otros hechos sociales de importancia: la fuerza de la oposición, que enarbolaba un programa socialista, las relaciones cercanas con otros países del Caribe cuyos gobiernos estaban empeñados seriamente en vencer el subdesarrollo y el amplio movimiento de países nuevos que, apartándose de la lógica de las potencias, intentaban fortalecer sus economías nacionales y desarrollar su autonomía.⁹

8. Véase CEPAL, *Anuario estadístico de América Latina, 1973*, Naciones Unidas, Nueva York, 1974, pp. 716-739.

9. Véase Cheddi Jagan, "Flexibilidad política e intransigencia ideológica", en *Revista Internacional*, núm. 12, Praga, diciembre de 1975, pp. 41-44.

El régimen guyanés se planteó, en una primera fase, una política de construcción de las infraestructuras económica y estatal. Como los miembros de la comunidad africana ocuparon los nuevos puestos al servicio del Estado, se consolidó el proceso de división étnica del trabajo originado en el período colonial y se manifestó también como una contradicción entre el campo y la ciudad.

Uno de los resultados de la política inicial de crecimiento fue la agudización de las dificultades económicas, ya que en lo fundamental se mantuvo la estructura colonial. Así, las empresas transnacionales continuaron extrayendo el máximo de beneficios y el país se vio sometido a los vaivenes de los precios internacionales del azúcar y también padeció la falta de recursos internos para financiar sus programas, el crecimiento del déficit de la balanza comercial y el endeudamiento externo.

En 1969, Forbes Burnham declaró ante el congreso de su partido: "Nos hablan de repúblicas fascistas, de repúblicas comunistas, de repúblicas capitalistas; yo propongo que la nuestra sea una república cooperativa. Ello destacará las instituciones económicas que hemos escogido como vehículo para convertir al pobre en un hombre verdadero."¹⁰ En esa reunión el CNP aprobó denominar al país República Cooperativa de Guyana, nombre que adoptó oficialmente en 1970. Años más tarde, al comentar el origen de su decisión, el Primer Ministro señaló: "¿Qué otra cosa podría haber hecho? ¿Ir al capitalismo, al que estaba totalmente ligado el pasado colonial de mi país? ¿Qué podría haber hecho para entusiasmar a la juventud, que representa 60% de la población?"¹¹

En otra ocasión Burnham comentó al periodista francés Bernard Cassen: "He estado expuesto al marxismo desde los 16 años. Aceptaría de buen grado la calificación de socialista. A fines del decenio de los cuarenta me atrajo el ejemplo yugoslavo, sobre todo porque me encontraba en Europa cuando sobrevino la ruptura entre Tito y Stalin. Los yugoslavos, al tiempo que aceptaban los objetivos generales del socialismo, busca-

10. Véase Bernard Cassen, *op. cit.*

11. Véase Jean Pierre Clerc, "La Guyana, îlot socialiste", en *Le Monde*, París, 15 y 16 de marzo de 1978.

ban formas que tuviesen en cuenta sus condiciones nacionales y su medio geográfico. Opino que el socialismo y el desarrollo exigen la máxima participación. Opté por el cooperativismo porque me parece el medio adecuado para que las palancas de la economía pasen a manos de las masas."¹²

A partir de 1970 se registró un cambio en la estrategia de desarrollo. El Gobierno exigió a las transnacionales una mayor participación en las ganancias por la vía de los impuestos y de la adquisición de parte de las acciones. Las empresas se resistieron, opusieron muchos obstáculos a la participación estatal e incluso llegaron al sabotaje; empero, la decisión guyanesa condujo a que el 15 de julio de 1971 se nacionalizara la Demerara Mining Company, filial de la Alcan, y se creara en su lugar la empresa estatal Guyana Bauxite, conocida como Guybau.

La primera nacionalización y su administración eficiente permitieron al régimen guyanés iniciar un serio proceso de recuperación de los recursos nacionales. En 1975 el Gobierno tomó posesión de la filial del consorcio Reynolds Mines Ltd., y creó en su lugar la empresa pública Berbice Mining Enterprise (Bermine). Con esas dos empresas el país logró el dominio de toda la minería y de las plantas de transformación de bauxita en alúmina.

En mayo de 1976 la Booker Mc Connell pasó a control gubernamental. Esta transnacional poseía un grupo de empresas con las que dominaba 80% de la superficie dedicada al cultivo de caña de azúcar, 11 de los 13 ingenios, y proporciones apreciables del sector de transformación, del comercio externo y de las finanzas.¹³

En la actualidad Guyana es el país de América Latina que, después de Cuba, tiene el sector público más amplio. Se estima que el Estado controla 80% de la actividad económica; sólo el cultivo de caña de azúcar y de arroz está en manos de particulares que venden su producto a la empresa estatal de comercialización.

Los grupos extranjeros han quedado reducidos a distribuir combustibles y a manejar cinco bancos y algunas compañías de seguros.

La cooperativización de la economía abarca un sector relativamente pequeño: sólo 10% del PIB se genera en empresas de ese tipo. En 1975 funcionaban 1 306 cooperativas con 110 000 miembros; su capital se estimaba en 12 millones de dólares. Existen cinco grandes sociedades de cooperativas por ramas de actividad y tres sociedades regionales que reúnen a cooperativas de distinta actividad.

Oficialmente la economía guyanesa tiene tres sectores: público, privado y cooperativo. Este último está llamado a convertirse en el predominante, sobre la base del lema "ayúdame que el Gobierno te ayudará". De acuerdo con esta política, los trabajadores se organizan y elaboran sus programas de desarrollo; el Gobierno participa con asesoramiento técnico, materiales, etc. Este procedimiento garantiza que sean los propios grupos sociales los que planteen y resuelvan los problemas más apremiantes y creen la infraestructura básica empleando la muy abundante mano de obra. Para apoyar el proceso de cooperativización, el Gobierno creó en 1970 el Banco Nacional Cooperativo y en 1973 una escuela de formación de los cuadros de dirección de las cooperativas.

A la política de cooperativización se oponen miembros de la comunidad hindú, que ven en ella un medio para limitar su desarrollo, especialmente en el sector del pequeño comercio, en el que las cooperativas de la comunidad africana han comenzado a ocupar el mercado. Sin embargo, existen ya numerosas cooperativas productoras de arroz cuyos miembros son de origen hindú.

Mediante este proceso de reorganización económica, y al tiempo que aspira a resolver difíciles problemas de alimentación, alojamiento, etc., el Gobierno busca ampliar su base social de apoyo político. Por ello, su programa ha recogido las principales demandas de la oposición, que durante mucho tiempo exigió la nacionalización de las empresas extranjeras. Por su parte, el PPP se plantea como objetivos la reforma agraria, la modernización de las relaciones políticas para eliminar la discriminación contra la comunidad hindú, la plena democratiza-

ción de los órganos del Estado, el fin del fraude electoral, el control obrero en las empresas, entre otros.¹⁴

El permanente choque entre las etnias obliga a analizar cada medida gubernamental no sólo por su bondad intrínseca, sino también por los efectos que pueda tener en la comunidad hindú.

La evolución económica reciente

El Gobierno de Guyana emprendió un plan quinquenal de desarrollo (1972-1976) en el que se propuso un crecimiento anual del PIB de 8.5% y una reducción considerable del desempleo, mediante la creación de puestos de trabajo en la agricultura, el sector forestal, y otros. Los objetivos prioritarios del plan eran: a] la ampliación de la intervención del Estado en la economía, especialmente en la producción directa y la comercialización de los principales recursos básicos; b] la diversificación de la actividad productiva y el estímulo al desarrollo regional, y c] la ampliación y fomento de las cooperativas.

Al hacer un balance del cumplimiento del plan mencionado, el Banco Interamericano de Desarrollo señaló: "Se han logrado algunos progresos en los tres aspectos, a pesar de las restricciones financieras, técnicas y de recursos humanos, y se prevé que se intensificarán los esfuerzos respecto de los dos últimos objetivos en el futuro inmediato."¹⁵

Sin embargo, catástrofes naturales, intensas lluvias e inundaciones en 1976, impidieron que hubiera excedentes agrícolas suficientes para sostener las importaciones: el déficit de la balanza en cuenta corriente llegó a 138 millones de dólares. El déficit externo y la reducción del ritmo de crecimiento imposibilitaron las inversiones previstas en el plan quinquenal, lo que impidió lograr diversos objetivos.¹⁶ Además, hubo que financiar el gasto público de manera inflacionaria.

En 1977 se combinaron nuevos problemas climáticos (excesivas lluvias en la

14. Jean Pierre Clerc, *op. cit.*

15. Banco Interamericano de Desarrollo, *El progreso económico y social en América Latina, 1976*, Washington, 1977, pp. 256-267.

16. Véase "Guyana faces more hardship after poor 1977 results", en *Latin America Economic Report*, núm. 12, vol. VI, Londres, 24 de marzo de 1978, p. 92.

12. Bernard Cassen, *op. cit.*

13. Véase "Guyana, vigoroso programa de nacionalizaciones", en *Comercio Exterior*, núm. 10, vol. XXVI, México, octubre de 1976, pp. 1170-1172.

primavera) y una prolongada huelga de los obreros azucareros en los últimos cuatro meses del año para reducir el volumen de la producción y la exportación azucareras. Por ello, el PIB sólo pudo mantener el nivel del año precedente, 394.5 millones de dólares a precios corrientes, con una inflación de 10%, por lo que a precios constantes el PIB se redujo. Otros factores negativos fueron un nuevo déficit de la balanza comercial (92.1 millones, 33.3% menor al de 1976) y el aumento del déficit gubernamental, que llegó a 30.2 millones. Este último incremento se explica por el considerable aumento de salarios que el Gobierno decidió otorgar a los empleados públicos y a los obreros de la bauxita.

Al iniciarse 1978 el desequilibrio de la balanza de pagos y el déficit gubernamental seguían siendo problemas de importancia. En enero Guyana solicitó crédito al Fondo Monetario Internacional, que condicionó su otorgamiento a la devaluación del dólar guyanés y la restricción del gasto público entre otros requisitos. Fuentes gubernamentales señalaron que no estaban dispuestas a devaluar, que se aumentarían los impuestos sobre energía y bienes de consumo popular y que se disponían a realizar un programa de reubicación de 2 000 empleados públicos en el interior del país.

El Gobierno guyanés ha elaborado un plan de desarrollo de ocho años, que se inicia en 1978. El nuevo plan estima que en sus primeros cuatro años el PIB crecerá anualmente en promedio 10% a precios corrientes y 5% a precios constantes, se ahorrarán divisas y aumentará la participación de los productos con valor agregado en las exportaciones. En el plan se estima un gasto público de 470.5 millones de dólares para los cuatro años. El programa de inversiones prevé que la agricultura recibirá el mayor volumen de inversiones (145.7 millones de dólares), para desarrollar varias zonas mediante obras de drenaje e irrigación; la minería recibirá 56.6 millones, la pesca y el sector forestal 34.4, la construcción de caminos 29.7, la manufactura 17.2, la educación y el desarrollo social 17.1, la salud 13.2 y las obras de protección de las superficies costeras 8.2 millones de dólares.

En la agricultura se pretende elevar sustancialmente la producción de arroz (segundo producto de exportación) y

aumentar la producción de legumbres, frutas, maíz y aceite de palma.

En el sector minero el plan sectorial ha fijado como meta su rehabilitación y expansión, para alcanzar en 1981 exportaciones por 238 millones de dólares (122.3 millones en 1977). Sin embargo, en el plan no se menciona la construcción de una planta de refinación de aluminio, y una gran hidroeléctrica de 1 000 megavatios en la zona del alto Mazaruni, que sería un paso importante en la integración vertical del sector.

No alineación, cooperación internacional y soberanía nacional

En los últimos años Guyana ha reforzado su política internacional de apoyo al Movimiento de los Países No Alineados, al Mercado Común del Caribe (que tiene su sede en la capital guyanesa) y de impulso a la Asociación de Países Productores de Bauxita. Al mismo tiempo ha desarrollado sus relaciones con Cuba y con los países del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME).

La política exterior del Gobierno de Guyana busca fortalecer la capacidad productiva del país, abrir nuevos mercados para sus materias primas e intenta encontrar aliados en la lucha por mantener la integridad de su territorio. En los años recientes las movilizaciones de tropas de Brasil, Surinam y Venezuela en las zonas fronterizas en disputa han constituido un motivo de alarma para Guyana.

La reforma constitucional abre una nueva fase en la historia político-jurídica de Guyana. Sin embargo, las características de esta nueva etapa estarán determinadas, en lo político, por las relaciones entre el PPP y el CNP. En ese aspecto persisten tendencias opuestas. Por una parte existen objetivos comunes a las dos principales fuerzas políticas del país: la transformación al socialismo y la defensa de su integridad territorial. Por otra parte, tienden a agudizarse los problemas raciales entre las comunidades de origen hindú y africano.

En los últimos meses prevaletió una tendencia al enfrentamiento entre el PPP y el CNP. En agosto de 1977 Cheddi Jagan llamó al CNP a formar un "gobierno de frente patriótico nacional" que pudiese movilizar al país por la vía guyanesa al socialismo, lo sacara de la crisis económica y garantizara la integri-

dad territorial. El partido gobernante rechazó la propuesta del PPP y reprimió la huelga de los trabajadores azucareros que reclamaban la distribución de los beneficios de las zafas 1974-1976. En estas condiciones el CNP inició el proceso de reforma constitucional que enfrentó nuevamente a las dos agrupaciones.¹⁷

La evolución futura de Guyana depende de su capacidad para encontrar una vía propia para su desarrollo, que le permita salir de su atraso, superar los conflictos fronterizos y resolver las grandes dificultades para integrar a sus dos comunidades étnicas en una nación guyanesa que aún no existe en este Estado cooperativo. □

PUERTO RICO

Problemas socioeconómicos y la cuestión nacional

Puerto Rico atraviesa por una coyuntura sumamente compleja, caracterizada por la acumulación de problemas económicos, sociales y políticos. Según numerosos observadores y comentaristas, si las contradicciones no se resuelven favorablemente para los sectores mayoritarios pueden provocar acciones populares desesperadas, de consecuencias imprevisibles para el futuro del país y, de modo más general, para la estratégica región del Caribe.

En los últimos años, particularmente a partir de 1973, la evolución económica del país ha resentido los efectos de la grave crisis económica del sistema capitalista mundial, lo que junto con otras deficiencias estructurales provocó un progresivo descenso de las tasas anuales de crecimiento del producto interno bruto (PIB) hasta 1976. En efecto, en 1973 el PIB a precios constantes creció 5.4%, lo que contrastó con el ritmo de crecimiento sostenido desde 1950, siempre superior a 10% anual. En los años siguientes, las tasas anuales de crecimiento continuaron descendiendo: 3.5% en 1974, 2.4% en 1975, y 1.2% en 1976.¹

17. Véase "Guyana: divided we stand", en *Latin America Political Report*, núm. 35, vol. XI, Londres, 9 de septiembre de 1977, pp. 277-278.

1. Véase "Puerto Rico: la independencia, ¿injustificada?", en *Comercio Exterior*, vol. 26, núm. 11, México, noviembre de 1976, pp. 1292-1298.

En cambio, en 1977 el comportamiento de la economía registró un ritmo de 3.5% que, aunque no puede compararse con las boyantes épocas anteriores, es un logro si se le considera en los marcos de la recesión.²

El sector más dinámico fue el industrial, que está orientado fundamentalmente hacia el exterior. Su evolución se reflejó en el comportamiento de las exportaciones durante el segundo semestre de 1977. De acuerdo con las estadísticas oficiales, las ventas al exterior totalizaron (incluido Estados Unidos) 2 354.2 millones de dólares y las compras 3 063.1 millones de dólares. Según estas fuentes, el intercambio comercial con Estados Unidos —el principal cliente de la isla— arrojó un saldo favorable a Puerto Rico por 287.8 millones de dólares.³

El sector del turismo también mostró un importante crecimiento (8%), lo que representó un ingreso de 425 millones de dólares en 1977.⁴

En cambio el sector agrícola tuvo un mal año, como resultado de la sequía que afectó a la isla. Esta situación obligó al Gobernador a pedir al Gobierno federal que declarara a Puerto Rico "área de desastre" y le otorgara una ayuda especial.⁵

La administración de Carlos Romero Barceló desde el inicio de su gestión, el 2 de enero de 1977, ha aplicado un conjunto de medidas de política económica para impulsar la economía puertorriqueña. Entre ellas destacan la supresión del impuesto de 5% con que se gravaban los productos de consumo básico, el aumento del impuesto a los asalariados que perciben de 600 a 800 dólares anuales y el aumento al doble de la tasa libre en los intereses de los depósitos a plazo.⁶

Por otra parte, para dar fluidez a la política de reinversión de utilidades, el Gobierno local reestructuró la Administra-

ción para el Fomento Económico (AFE), organismo oficial encargado de promover las inversiones locales y foráneas. En primer término destituyó al Director debido a que abogaba por sostener el programa de exención contributiva total, que se aplicaba desde 1947, y que Romero Barceló tenía proyectado modificar por una exención contributiva parcial.

Después se formaron dos entidades nuevas en la AFE, el Fondo Temporal de Liquidez, órgano emisor de bonos y certificados industriales, a plazo de un año, para retener una proporción mayor de utilidades en la isla, sin gravámenes, y la Fundación para el Desarrollo, encargada de canalizar a la industria los recursos captados por el Fondo. Al mismo tiempo, se fundó el Banco de Desarrollo, para negociar la colocación de los bonos y certificados entre los inversionistas.

La reforma fiscal culminó con la revisión de los incentivos industriales y la promulgación, en abril de 1978, de una nueva ley que concede una exención parcial, dividida en períodos de cinco años, disminuyéndose gradualmente hasta que termine al final de 20 años. Esta exención se extiende hasta 25 años para las empresas que se instalen en las islas de Vieques y Culebra.⁷

Según funcionarios del Gobierno, el programa permitirá a las industrias contribuir al erario sin lesionar la atracción económica tradicional de Puerto Rico para los inversionistas.

Otro incentivo incluido en esa ley es un subsidio de 5% sobre la nómina de producción, con el propósito de recompensar a las industrias que paguen salarios altos y empleen a muchos trabajadores.

Según el director de la AFE, al conocerse las condiciones del nuevo programa de exenciones varios centenares de empresas estadounidenses y europeas solicitaron información para establecerse en la isla.

Entre tanto, durante 1977, el sector laboral expresó su descontento por la falta de atención del Gobernador para nivelar el salario mínimo en Puerto Rico con el del mercado de trabajo de Estados Unidos, así como por la lenta creación de empleos. Estas reclamaciones son impor-

tantes si se considera que en Puerto Rico el desempleo y el subempleo abarcan a 40% de la población económicamente activa y que el salario mínimo equivale a un tercio del sueldo del obrero estadounidense.

Cabe recordar que tanto la nivelación de salarios como la creación de empleos fueron dos promesas que Carlos Romero Barceló hizo durante su campaña electoral.⁸

En junio de 1977, para disminuir la presión de los trabajadores, la administración local estableció una nueva reglamentación que introdujo una prima adicional para las horas extras trabajadas después de las 40 horas por semana, pero no modificó el nivel de los salarios mínimos.

Esta medida no fue bien acogida por los sindicatos ni por los empresarios. Para aquéllos, se trataba sólo de una medida tendiente a apaciguar los ánimos y evitar que las organizaciones de trabajadores impulsaran movimientos de huelga para satisfacer sus demandas. En cambio, para los empresarios, esta nueva reglamentación era nociva para la producción, ya que desalentó el trabajo intensivo.

Al final de 1977, diversos sectores de trabajadores declararon paros para demandar mejores salarios. Los más importantes fueron el de los operarios de los autobuses de San Juan, quienes exigían un aumento de 75 dólares mensuales, y el de los 6 200 trabajadores del sector eléctrico. Las exigencias de los segundos fueron por un aumento de 140 dólares mensuales. La huelga de los trabajadores electricistas duró 113 días —la más larga en los últimos años— y, al final, aceptaron un acuerdo que estipula los aumentos para los siguientes cuatro años: 50 dólares mensuales durante el primer año, 45 en el segundo, 50 en el tercero y 55 dólares mensuales en el cuarto año.⁹

Por otra parte, en febrero último, un pequeño grupo de pescadores de la isla de Vieques impidió que la Organización del Tratado del Atlántico del Norte (OTAN) realizara la "operación Springboard", consistente en maniobras de práctica en

2. Véase "Puerto Rico", *Quarterly Economic Review*, Londres, segundo trimestre de 1977 y primero de 1978. Véase también *Excelsior*, México, 23 de junio de 1978.

3. Véase *Puerto Rico Exporta*, año 2, núm. 4, San Juan, abril de 1978.

4. *The Journal of Commerce*, Nueva York, 12 de junio de 1978.

5. Véase "Puerto Rico", *Quarterly Economic Review*, Londres, tercer trimestre de 1977.

6. Véase *Quarterly Economic Review*, Londres, primer trimestre de 1977.

7. Véase *Latin America Economic Report*, vol. VI, núm. 13, Londres, 7 de abril de 1978.

8. Véase "Puerto Rico: petróleo y anexión, telón de fondo en el cambio de gobierno", en *Comercio Exterior*, vol. 27, núm. 3, México, marzo de 1977, pp. 317-319.

9. Véase *Latin America Economic Report*, vol. VI, núm. 16, Londres, 28 de abril de 1978.

los arrecifes y en algunas partes de la costa.¹⁰

El incidente se propagó con rapidez, e intensificó la polémica sobre la realidad política de Puerto Rico, su relación con Estados Unidos y su lucha por la independencia.

De acuerdo con los especialistas, para la evolución futura de la isla están presentes tres elementos importantes.

El primero lo constituyen las negociaciones que se llevan a cabo entre el Gobierno de la isla y las empresas estadounidenses para explotar los yacimientos de cobre, níquel y, fundamentalmente, el petróleo.

Con respecto a este energético, señalan que la probada existencia de yacimientos petroleros en la plataforma insular de Puerto Rico, con posibilidades de extraer 200 000 barriles diarios por un período de 25 años, ha ocasionado una seria controversia entre el Gobierno de Washington y el de San Juan.

En efecto, el gobernador Romero Barceló propuso a la administración federal que se aplique a la isla una antigua ley que otorgaba soberanía a Puerto Rico sobre 10.3 millas marinas de sus aguas territoriales (que es donde se localizan aquellos yacimientos), como la disfrutaban Texas y Florida. Sin embargo, el presidente James Carter afirmó que sólo se le concederían tres millas, al igual que a los demás estados de la Unión Americana.¹¹

El estancamiento en las discusiones sobre esta importante demanda puertorriqueña, aunado a la creciente presión popular, decidió a Carlos Romero Barceló a anunciar su asistencia a la próxima reunión del Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas, que se celebrará a fines de agosto de 1978 para plantear esa irregularidad. A esta reunión asistirán, además, otras personalidades políticas representativas de los partidos de oposición y el exgobernador Rafael Hernández Colón.¹²

10. *Uno más Uno*, México, 14 de febrero de 1978, y "Puerto Rico: marinos de EU derrotados por pescadores", en *Proceso*, núm. 68, México, 20 de febrero de 1978.

11. *Panorama Económico Latinoamericano*, año II, núm. 79, La Habana, 10 de julio de 1978.

12. *Excelsior*, México, 23 de agosto de 1978.

El segundo elemento de la vida política nacional lo constituyen los intentos de ciertos sectores insulares —entre los que destaca el Partido Nuevo Progresista (PNP) de Carlos Romero Barceló— para lograr que Puerto Rico se transforme en un estado más de Estados Unidos.

Sobre este aspecto, los observadores señalan que el Gobierno de Washington ha realizado muchos estudios pero no ha tomado una resolución que permita vislumbrar la realización de este viejo sueño anexionista. Según esas opiniones, existen algunos escollos, aparentemente difíciles de resolver, como son la cuestión racial y la religiosa de los puertorriqueños, y la presión mundial, especialmente la de América Latina, encabezada por Cuba y Venezuela.

Además, los funcionarios del Gobierno de Washington se niegan a discutir el problema de la anexión mientras Puerto Rico tenga una posición económica crítica como la actual.

El último elemento es el de la actitud de los partidos y las organizaciones independentistas, cuya articulación con las masas y su efectividad política ha crecido significativamente en los últimos años, aunque todavía no ha conseguido consolidarse como un grupo hegemónico entre la población debido, principalmente, al enorme despliegue propagandístico de Estados Unidos, que anuncia el "peligro comunista" para la isla. □

VENEZUELA

Tiempos de sobriedad

La gran esperanza venezolana de fundar la rápida industrialización del país en los enormes ingresos obtenidos del petróleo corre el peligro de aplazarse si continúa la evolución desfavorable en los pagos externos que se inició en 1977 y persiste en 1978. El auge de esta nación sudamericana, consecuencia del alza mundial de los precios del petróleo en 1974 y años subsiguientes, se ha debilitado recientemente al disminuir su producción del hidrocarburo, así como por la inflación mundial y la depreciación ininterrumpida del dólar, no compensadas por los modestos aumentos de precios acordados el año pasado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Al mismo tiempo, el ambicioso plan de

desarrollo ha impulsado aceleradamente las importaciones, año tras año. Como resultado, el amplio superávit que Venezuela tenía en cuenta corriente se convirtió en un déficit de casi 1 000 millones de dólares en 1977 y amenaza con elevarse a 3 500 millones de dólares en 1978.

La evolución que se observa en Venezuela es paralela a la registrada en la OPEP, en gran parte creación de este país. La multiplicación de los precios del petróleo en 1974 puso a disposición del Estado venezolano cuantiosos ingresos que, con cálculo previsor, pensó administrar con moderación a fin de escapar a los peligros de la inflación que hubiera podido desatar aquella riada de dólares, si no se la controlaba. Las autoridades venezolanas concibieron un gran proyecto para explotar todas las riquezas del país e industrializarlo a marchas forzadas. La masa de ingresos que no pudo invertirse de inmediato con propósitos nacionales se utilizó generosamente en créditos y convenios de cooperación que beneficiaron a otros países latinoamericanos. Sin embargo, la contraofensiva de las grandes potencias mundiales contra la OPEP resultó a la postre demasiado fuerte para esa organización que, dividida, tuvo que aceptar reducciones en el poder adquisitivo del petróleo. Sea verdad o no que hay exceso temporal de petróleo, el hecho es que la OPEP se ha batido en retirada y ello ha tenido efectos negativos sobre la economía venezolana.

Conviene aclarar, sin embargo, que la situación es desfavorable con respecto a lo que sucedía hace tres o cuatro años y en relación con las expectativas que el auge petrolero había suscitado, pero que ello no significa de ningún modo que el país no siga disfrutando de prosperidad. Basta un dato para ilustrar este aserto: el ingreso venezolano per cápita pasó de 697 dólares en 1972 a 1 744 dólares en 1977.

Como se ha dicho, uno de los puntos débiles se halla en el comercio exterior. A pesar de que las exportaciones venezolanas llegaron a más de 10 400 millones de dólares en 1977, las importaciones las superaron y el saldo comercial fue negativo. Para 1978 se teme un déficit aún mayor, lo que pondría definitivamente en dificultades la realización del V Plan de la Nación.

En estas circunstancias, el Estado juzgó que era preciso frenar la fiebre de consumo suntuario que se había apode-

rado del país y programar las importaciones del sector público. En consecuencia, en abril de 1978, a pesar de la oposición de los comerciantes, prohibió la importación de unos 500 artículos suntuarios e hizo más severas las restricciones para la introducción al país de vehículos ensamblados en el exterior. La prohibición abarcó productos como calzado, televisores, yates, lavadoras eléctricas, cocinas, tejidos de seda, pelos finos y fibras sintéticas. El decreto también establecía que la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y Siderurgia del Orinoco (Sidor) asumían la responsabilidad en la importación de varios productos de acero. Luis Petrosina, ministro de Asuntos Económicos, explicó dichas prohibiciones como un esfuerzo del país para proteger la industria nacional.

Es indudable que la prosperidad que trajo la elevación de los precios del petróleo no se aceptó con la moderación apropiada, pero tampoco puede negarse que la causa principal del viraje desfavorable de la balanza comercial fue el descenso de la producción del hidrocarburo, a consecuencia del debilitamiento de la demanda internacional. El excedente de producción de la OPEP, estimado en enero de 1978 en 2 000 000 de barriles diarios, fue al parecer el principal factor que impidió el acuerdo sobre un nuevo aumento en la reunión de Caracas, celebrada en diciembre de 1977. En el caso de Venezuela, empero, el mayor daño provino del suave invierno de que disfrutó Estados Unidos, su principal mercado. Venezuela provee alrededor de un tercio de las necesidades estadounidenses de *fuel oil*, cuyos precios no son fijados por la OPEP. Desde noviembre de 1977 la demanda de petróleo comenzó a perder fuerza, lo que obligó a la empresa estatal Petróleos de Venezuela a ofrecer descuentos en las ventas de *fuel oil*.

En los primeros meses de 1978 la situación se deterioró aún más. La producción de petróleo llegó a declinar a 1 500 000 barriles diarios, contra un promedio de 2 400 000 barriles durante el mismo período del año anterior; se registraban, así, los niveles de producción más bajos en 20 años. Estos acontecimientos impulsaron al Gobierno a seguir adelante con su proyecto de contraer un préstamo por 1 200 millones de dólares en el mercado financiero de Europa. También lo indujeron, dada la disminución de ingresos que la caída de la producción

representaba para el Estado, a recortar el presupuesto de 1978, estimado originalmente en 11 000 millones de dólares, y a moderar los gastos presupuestarios previstos para 1979: 10 800 millones de dólares, sobre la base de una producción de 2 100 000 barriles diarios.

El presidente Carlos Andrés Pérez reconoció por entonces que "ciertos desajustes en el mercado petrolero internacional han provocado un descenso en la producción y las ventas al exterior", pero aseguró también que ello no afectaría a "los planes y proyectos del sector público". A su vez, Valentín Hernández, ministro de Energía y Minas, manifestó que se trataba de una situación transitoria, y el tiempo iba a darle la razón. Ya para marzo la producción comenzó a recuperarse y esta tendencia se afirmó en los meses subsiguientes, de modo que en la primera mitad de 1978 ascendió a 2 051 920 barriles diarios, inferior desde luego a la del mismo período de 1977, pero no en la medida que los dos primeros meses del año habían hecho temer.

Entre tanto, el presidente de Petróleos de Venezuela, general Rafael A. Ravard, indicó recientemente que es preciso elevar las reservas probadas. El uso más intensivo de métodos de recuperación secundaria —un poco menos de la mitad de la producción se obtiene utilizando esta técnica— ha permitido mantenerlas en alrededor de 18 000 millones de barriles, cifra que no se considera satisfactoria. En 1978, dijo el general Ravard, las inversiones de capital pasarán de 2 200 millones de bolívares a 5 000 millones anuales, de los cuales 3 600 millones se gastarán en perforar nuevos pozos y reparar los existentes, así como en instalar modernos sistemas de producción y de recuperación secundaria. Al mismo tiempo, se asignarán 1 000 millones de bolívares a la exploración, que incluirá la perforación de pozos costa afuera, donde las investigaciones sísmográficas señalan altas probabilidades de hallar yacimientos productivos. Las perforaciones se harán en tres áreas: frente al delta del Río Orinoco, al sur de la Isla de Trinidad; en el Golfo Triste, frente a Puerto Cabello, unos 200 kilómetros al oeste de Caracas, y en el Golfo de la Vela, a unos 600 kilómetros de la capital venezolana, entre la costa y la Península de Paraguana. En abril se anunció que se había autorizado a Petróleos de Venezuela a explorar en todo el territorio venezolano; se precisó que hasta

entonces la compañía estatal no estaba facultada para explorar más que en una zona de tres millones de hectáreas.

Petróleos de Venezuela también ha recibido la misión de desarrollar los cru- dos pesados de la llamada Faja Petrolera del Orinoco. El proyecto es controvertido. Muchos piensan que las gigantescas reservas de petróleo pesado concentradas en esa banda de casi 700 kilómetros de longitud no pasan de ser un espejismo, puesto que los costos de explotación superarían a los beneficios. Las ofertas de tecnología extranjera, sin embargo, no han faltado. Particularmente interesante es la que hizo Francia en abril, para realizar estudios de factibilidad sin compromiso alguno.

En realidad, la extracción de petróleo se lleva a cabo en esa zona desde hace años. Una compañía, Roquevén, produce alrededor de 200 000 barriles diarios, pero las tasas de recuperación son inferiores a 10%. Según el director del departamento responsable de esa zona en el ministerio de Energía y Minas, Francisco Gutiérrez, el problema no consiste sólo en elevar las tasas de recuperación, sino también en desarrollar la tecnología para refinar el crudo de la Faja del Orinoco.

Venezuela, por otra parte, ha estado examinando las posibilidades de un trueque de petróleo con Gran Bretaña. El proyecto, sugerido por Valentín Hernández y que actualmente analiza el gobierno británico, consistiría en intercambiar crudo pesado venezolano por petróleo ligero del Mar del Norte. Como el primero tiene un valor inferior, los venezolanos tendrían que compensar la diferencia, ya sea con un mayor volumen o mediante un arreglo monetario.

El hecho de que Venezuela tenga una relativa escasez de dinero y haya tenido que endeudarse —la deuda pública aumentó 54.5% en 1977, para totalizar 10 000 millones de dólares en junio de 1978—, a pesar de sus fabulosos ingresos petroleros, radica en el plan quinquenal de desarrollo en el que se ha previsto invertir alrededor de 52 000 millones de dólares. El Gobierno debía aportar 27 000 millones y la empresa privada la cantidad restante.

La actividad desarrollada en este marco permitió que en 1977 se registrara un crecimiento económico real de casi 10% (7.6% en 1976), si bien es probable que

esa tasa no pueda alcanzarse en 1978. Otro factor que apoya esta previsión es que en 1977 la producción agrícola fue excepcional, en parte por razones climáticas que casi seguramente no se repetirán. En cambio, es muy posible que mejore el panorama para la industria, donde los problemas de abastecimiento y de escasez de mano de obra preparada —fenómeno que ocurre paralelamente a la existencia de un elevadísimo porcentaje de marginados en una población de poco más de 13 millones de habitantes—¹ entorpecieron el ritmo de la producción.

El plan quinquenal abarca todos los aspectos de la vida económica de la nación. Entre otras cosas, se propone cuadruplicar la producción de acero y construir dos grandes complejos para la refinación de aluminio. Tras varios decenios de abandono relativo, la agricultura también recibirá atención y financiamiento, al igual que la promoción de las pequeñas industrias. Otros sectores que disfrutaban de elevada prioridad son energía eléctrica, las viviendas baratas, salud pública, educación, servicios portuarios, ferrocarriles, carreteras y transportes colectivos.

El Gobierno se propone elevar la capacidad de producción de acero de la Siderúrgica del Orinoco, de 1 200 000 ton a 4 800 000 e.i. 1980, y construir una acería en Zulia que producirá más de un millón de toneladas anuales en 1982 y cinco millones en 1990.

Venezuela también aspira a aumentar su producción de aluminio, de 400 000 a un millón de toneladas por año, para obtener divisas por 1 500 millones de dólares. Un acontecimiento estimulante ha sido el reciente descubrimiento de los yacimientos de bauxita *Los Pijiguaos*, en el estado de Bolívar, con reservas de 500 millones de toneladas de mineral, suficientes para alimentar la producción venezolana de aluminio durante muchos años.

La capacidad de generación eléctrica asciende actualmente a 5 500 megavatios, de los cuales algo más de la mitad son de origen térmico y el resto hidráulico; se proyecta aumentarla a 8 500 Mw para 1980, mediante la inversión de unos 25 000 millones de bolívares. El progra-

ma de obras avanza con bastante rapidez: el 11 de junio, el presidente Carlos Andrés Pérez inauguró el primer vaciado de concreto en la etapa final de la gran represa Raúl Leoni, complejo hidroeléctrico erigido por empresarios venezolanos y brasileños, que permitirá incrementar las industrias del hierro y el aluminio en la región. En la misma zona de Guayana, en efecto, el Jefe del Estado venezolano inauguró la planta de aluminio Venalum, una empresa mixta donde el Estado participa con 80% del capital, mientras que el resto es japonés.

El país también está vitalmente interesado en elevar la producción agrícola. Sin embargo, a pesar de haber invertido alrededor de 17 000 millones de bolívares en el sector desde 1974, la participación de éste en el producto interno bruto ha disminuido de 6.3 a 5.9 por ciento. En 1976, por ejemplo, las compras de alimentos al exterior equivalieron a 13% de la importación total. Es, pues, de gran importancia sustituir esas compras con producción nacional. Sobre todo, si se tiene en cuenta que los alimentos son un factor que presiona considerablemente en el costo de la vida —a pesar de que en Venezuela muchos de ellos están subsidiados— y contribuye a acelerar la inflación, que en 1977 llegó a una tasa oficial de 8% —la real se estima en 20%—, no tan pequeña, aunque desde luego bastante inferior a la que padecen otros países latinoamericanos.

Uno de los procedimientos clásicos para combatir la inflación consiste en elevar los impuestos, pero cuando el presidente Carlos Andrés Pérez tomó la iniciativa en este sentido, su propio partido, Acción Democrática, se opuso, por lo cual Venezuela sigue figurando como uno de los países con tasas impositivas más bajas en el mundo.

Aquí cabe destacar el papel desempeñado por el Fondo de Inversiones de Venezuela, que en los dos primeros años de operaciones —en 1976 y 1977 la disminución de ingresos determinó que el Fondo no recibiera contribución alguna— facilitó a otros países un total de 4 600 millones de bolívares, distribuidos de la siguiente manera: 2 110 millones de bolívares a un fondo en el Banco Interamericano de Desarrollo; 1 900 millones para ayudar a los países centroamericanos; 200 millones para Jamaica; 200 millones para el Banco Centroamericano de Integración Económica; 100 millones para el Banco

de Desarrollo del Caribe. Además, Venezuela firmó importantes acuerdos de cooperación con México y Colombia, que prevén, entre otras cosas, el establecimiento de empresas conjuntas.

En lo que se refiere al Caribe, el presidente Carlos Andrés Pérez dijo en abril que "América Latina tiene una gran responsabilidad dentro de esta área de nuevas naciones," pero al mismo tiempo subrayó que se debe evitar que les suceda lo que a los países latinoamericanos con la ayuda recibida de las potencias industrializadas, y concluyó: "Debemos estudiar un plan de cooperación para el Caribe, pero un plan de cooperación que no sea como el que nos ofrecían las naciones industrializadas, que nos decían: Aquí tienen este dinero, esta cooperación, pero para que hagan tal cosa en particular, o para que lleven a tal empresa transnacional en particular."

Venezuela es uno de los países que con mayor firmeza ha impulsado la integración latinoamericana; en especial, ha centrado sus esfuerzos en el Grupo Andino y en el Sistema Económico Latinoamericano. En julio de 1978, como resultado de su acercamiento a Brasil, fue uno de los países que suscribieron el Tratado de Cooperación Amazónica. En el plano internacional ha fundado su política en un invariable apoyo a la OPEP, como punta de lanza del Tercer Mundo para obtener mejores condiciones de intercambio en un nuevo orden económico internacional. En diciembre de 1977, durante la reunión de la OPEP en Caracas, el presidente Carlos Andrés Pérez propuso elevar los precios del petróleo y consagrar los ingresos resultantes de esa alza —durante el primer año— a pagar las deudas de países en desarrollo que carecen de petróleo.

El 1 de abril de 1978 se inició oficialmente la campaña electoral que culminará en diciembre con la elección de un nuevo presidente de la República. Aunque son seis los candidatos, en realidad sólo dos tienen posibilidades de triunfar: Luis Piñerúa Ordaz, de Acción Democrática, y Luis Herrera Campins, del partido democristiano Copei. La izquierda, dividida, presenta los otros cuatro: José Vicente Rangel, del Movimiento al Socialismo (MAS); Luis Beltrán Prieto, del Movimiento Electoral del Pueblo (MEP); Américo Martín, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), y Héctor Mújica, del Partido Comunista Venezolano. □

1. Véase, en este número, el artículo de Miguel Chossudovsky "La economía política del subdesarrollo. El caso de Venezuela", pp. 917-924.

recuento latinoamericano

Asuntos generales

Disminuyen las presiones inflacionarias

Según un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), las presiones inflacionarias siguen afectando a los países más industrializados de América Latina, aunque —con excepción de Argentina— se logró cierta mejoría.

En el informe se agrega que las cifras de esta región son más altas que las del conjunto de los países occidentales industrializados, cuyo índice inflacionario en el período terminado en mayo fue de 6.5%. Los datos que proporciona para algunos países, en un período de 12 meses, son los siguientes: Argentina (hasta abril de este año), 18.6%; Brasil (mayo), 3.6%; Colombia (mayo), 23.3%; Chile (junio), 40.4%; México (marzo), 17.5%; Uruguay (febrero), 46.9%, y Venezuela (abril), 6.4 por ciento.

Producción de acero

El último informe del Banco Francés e Italiano para América del Sur señala que en 1977 la producción de acero de América Latina creció 13.5%. Brasil produjo 11 238 000 ton., ocupando el primer lugar en la región y el duodécimo en el mundo. México produjo 5 500 000 ton.; Argentina, 2 693 000; Venezuela, 820 000; Colombia, 395 000; Chile, 563 000, y Perú, 350 000 toneladas.

Según la institución bancaria, la evolución de la siderurgia en América Latina fue excepcional, ya que durante 1977 la mayoría de las acerías de occidente tuvieron pérdidas, algunas paralizaron sus actividades y muchas solicitaron a sus respectivos gobiernos la aplicación de medidas proteccionistas. □

Argentina

Cierre de dos plantas de automotores

La General Motors Corporation anunció en Detroit el inminente cierre, "por incosteabilidad", de las dos plantas de su subsidiaria en Argentina. Según los voceros de la empresa, el mercado automotriz de ese país resulta reducido para las diez compañías fabricantes de automóviles.

Por su parte, el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor decretó el "estado de alerta" en todo el país, ya que esa medida afecta directa o indirectamente a 24 000 trabajadores. □

Bolivia

Polémica sobre futuras elecciones

En un discurso dirigido a la nación al conmemorarse el 153 aniversario de la independencia de Bolivia, el actual presidente, general Juan Pereda Asbún, anunció que en 1980 se realizarán los comicios para elegir a un gobierno democrático.

En su discurso, el Presidente convocó a todos los partidos políticos a participar en la formulación de los estatutos que regirán las elecciones de 1980, "de modo que el sufragio del pueblo esté garantizado por leyes adecuadas". El nuevo ordenamiento electoral deberá abarcar la reforma de la papeleta de sufragio, la participación de las minorías, el registro electoral, el documento de inscripción, las normas para la organización de los partidos políticos y la prohibición de participación extranjera en las elecciones.

La oposición política y obrera rechazó el proyecto electoral y exigió la convocatoria con un plazo más breve.

La Unión Democrática Popular (UDP) —un frente de izquierda moderada— demandó la realización de elecciones en el plazo máximo de seis meses. También propuso la formación de un gobierno representativo, la inmediata convocatoria a elecciones, la derogación del estado de sitio, la constitución de un poder electoral imparcial y democrático, el compromiso de las fuerzas armadas de velar por la pureza de las elecciones y, finalmente, que el Gobierno no propicie ninguna candidatura oficial y que dé libre acceso a todas las fuerzas políticas. Otras organizaciones hicieron demandas similares. Según los observadores, el enérgico rechazo al planteamiento gubernamental refleja el descontento contra el régimen de Pereda, quien busca frenar el avance de la izquierda.

Ayuda estadounidense

Un vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó que su país mantendrá la ayuda económica a Bolivia y que continuará el financiamiento de programas que responden a las necesidades de los pobres. También afirmó, sin más detalles, que el programa de asistencia militar está "bajo estudio". □

Brasil

Elecciones parlamentarias

El 15 de agosto se inició oficialmente la campaña para las elecciones parlamentarias del 15 de noviembre próximo, en las que se renovarán los 420 diputados y dos tercios de los 66 senadores, así como las asambleas legislativas de los 22 estados de la federación brasileña. En la misma ocasión se elegirá por vía indirecta a los 22 nuevos gobernadores.

De acuerdo con la ley vigente, los candidatos podrán realizar propaganda callejera y concentraciones políticas, pero tienen prohibida la propaganda por radio y televisión.

Según los observadores, estas elecciones pueden plantear un serio obstáculo para el Gobierno, ya que se espera que el Movimiento Democrático Brasileño —el único partido de la oposición autorizado— amplíe su influencia en la Cámara de Diputados e incluso obtenga la mayoría. □

Colombia

Nuevo Presidente

El 7 de agosto asumió la presidencia del país Julio César Turbay Ayala, para un período de cuatro años.

En la toma de posesión del nuevo mandatario estuvieron presentes los presidentes de Venezuela, Ecuador y Bolivia, así como los jefes de Estado de Panamá y Perú. También concurrieron 60 delegaciones extranjeras.

En su mensaje al país, Turbay pidió a sus compatriotas que apoyaran a las fuerzas armadas para evitar que Colombia "caiga en los abismos de la anarquía". Asimismo, aseguró que "en mis manos no correrán peligro las libertades, ni sufrirán recortes las garantías sin perjuicio de ejercer, para preservarlas, una autoridad severa dentro de la Constitución y fuerte dentro de la democracia".

El nuevo mandatario señaló que su propósito es el de convertirse "en un servidor público y no en un cortesano del populismo", por lo que su gobierno se caracterizará por la moderación. En cuanto a la política internacional, Turbay Ayala expresó que Colombia incrementará sus relaciones con el mundo entero, sin perder "su tradicional orientación

dentro del concepto de la pluralidad ideológica". Finalmente, sugirió la posibilidad de suspender el estado de sitio que rige al país desde hace dos años, para lo cual se estudiará un nuevo estatuto sobre la seguridad del Estado que permita a las instituciones funcionar y defenderse "de los peligros que las amenazan".

El gabinete de Turbay Ayala está integrado por siete liberales, cinco conservadores y un militar. □

Cuba

Resultados de la zafra azucarera

A mediados de julio último se concluyeron las actividades de la zafra azucarera 1977-1978. De acuerdo con las cifras publicadas, la producción cubana de azúcar fue de 7 350 000 ton., la segunda en importancia en la historia del país.

Las dos zafras anteriores de mayor importancia fueron la de 1960-1961, en la que se produjeron 6 875 500 ton., y la de 1969-1970, cuando se obtuvo la mayor producción azucarera de Cuba, 8 537 600 toneladas.

XI Festival Mundial de la Juventud

Del 28 de julio al 5 de agosto se llevó a cabo en La Habana el XI Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. Al acto asistieron 18 500 delegados de 145 países.

Los delegados presentaron ponencias sobre la lucha por la paz, sobre el desarrollo de la cooperación internacional y sobre la lucha contra el hambre, el analfabetismo y otras consecuencias del colonialismo y del imperialismo.

Una de las actividades más destacadas del Festival fue el Tribunal Internacional "La juventud acusa al imperialismo", donde se expusieron numerosos testimonios sobre la intervención de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos en los países de Asia, África y América Latina.

Además de las actividades políticas, se expusieron muestras artísticas y culturales de los 145 países representados. □

Chile

Ultimátum de nueve oficiales

Según Pierre Benoit, del diario parisense *Libération* (8 de agosto de 1978), nueve oficiales del ejército chileno presentaron un ultimátum al general Augusto Pino-

chet para que resuelva, en un plazo de seis meses, la crisis que provocaron en las fuerzas armadas el caso Letelier y el conflicto por el Canal de Beagle. El articulista afirma que "el caso Letelier ha sido como un bumerang que acelera las pugnas internas en la junta militar".

La Junta se resquebraja

El 24 de julio último, el general Gustavo Leigh —jefe de la Fuerza Aérea (FACH) y miembro de la Junta Militar que gobierna Chile desde el 11 de septiembre de 1973— fue destituido por órdenes del presidente Augusto Pinochet.

Oficialmente, el motivo de la destitución radica en las declaraciones que el exfuncionario hizo el 18 de julio al diario italiano *Corriere della Sera*, en las que cuestionó la condición y el contenido del actual proceso chileno. Leigh afirmó que para mejorar la imagen internacional de Chile es necesario que el Gobierno anuncie un programa político de transición al poder civil, que puede sintetizarse en cuatro puntos: "1) un estatuto que regule la vida de los partidos políticos [con exclusión de los marxistas]; 2) la restauración de los registros electorales que fueron destruidos; 3) una ley general que regule elecciones libres, y 4) un texto de constitución sometido a referéndum". Luego agregó que podría renunciar a la Junta si se comprobaba judicialmente la responsabilidad directa o indirecta del Gobierno en el asesinato del ex canciller Orlando Letelier.

Según diversas opiniones, las divergencias entre Pinochet y Leigh se hicieron públicas por primera vez en agosto de 1975, cuando el jefe de la FACH cuestionó el elevado costo social de la política económica de la Junta Militar. Cuando a fines de 1977 Pinochet convocó a un plebiscito para condenar a la ONU, por su interés por las condiciones de vida de los presos políticos y por la vida e integridad de los "desaparecidos", Leigh rechazó públicamente la celebración de esa consulta.

Al conocerse la destitución de Leigh, renunciaron diez de los 21 miembros del alto mando de la FACH; cinco más pasaron a la reserva y otros cuatro fueron removidos. □

Honduras

Incruento golpe de Estado

El Consejo Superior de las fuerzas armadas de Honduras anunció, el 7 de agos-

to último, que el jefe del Estado, Juan Alberto Melgar Castro, había presentado su dimisión y que un triunvirato militar presidido por el Jefe de las fuerzas armadas asumió el poder. En el mismo comunicado se afirma que el nuevo gobierno "continuará en la política fijada en la proclama del 22 de abril de 1975" y que se mantendrá la decisión de constitucionalizar al país, mediante elecciones libres y honestas, que se celebrarán el 20 de abril de 1980. □

Nicaragua

Roces entre el Gobierno y la Iglesia

El 4 de agosto la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica nicaragüense publicó un documento en el que pide la renuncia del presidente Anastasio Somoza, para "evitar un vacío de poder y la anarquía" en el país.

El comunicado afirma que el actual Gobierno carece de la confianza del pueblo y exige la formación de un gobierno nacional, con amplio apoyo popular, así como la instauración de un nuevo orden económico y social para pacificar el país. También demanda el derecho de libre asociación política, la reorganización de la Guardia Nacional "en base a intereses nacionales, no partidistas ni personales", la supresión de las leyes que violan la libertad de expresión y el fin de la represión.

Por su parte, el presidente Somoza afirmó que ni él ni su partido "se van del poder". En su discurso advirtió que "tenemos un partido poderoso, el respaldo de un pueblo amante de la paz, un ejército crisol de lealtad y todos con la firme voluntad de evolucionar en paz y sin violentar la Constitución".

Luego, en clara referencia al documento eclesástico, el mandatario nicaragüense afirmó que quienes piden su renuncia son "grupos nuevos que pretenden violar la Constitución de la República". □

Paraguay

Stroessner: presidente por sexta vez

El 15 de agosto el general Alfredo Stroessner inició su sexto mandato consecutivo como presidente de Paraguay.

Después de jurar, "por Dios y por la Patria", ante el Congreso Nacional, el presidente paraguayo confirmó a su actual gabinete de 11 ministros. □